

Franqueo
concertado

PRECIOS DE SUSCRIPCION

Ayuntamientos, 36 pesetas al año.
Juntas vecinales, Juzgados municipales y asociaciones o gremios, 20 pesetas al año.

Particulares, 20 pesetas al año y 10 al semestre.

Se suscribe en Soria, en la Intervención de fondos de la Diputación, siendo el pago adelantado. Número atrasado 50 céntimos.



ADVERTENCIAS

1.^a No se insertará ninguna comunicación oficial que no venga registrada por conducto del Gobierno de la provincia.

2.^a Los anuncios no oficiales, se insertarán previo ingreso de su importe en la Caja provincial. En las subastas celebradas por entidades oficiales de cualquier clase, al otorgar los contratos de adjudicación, se exigirá el recibo que acredite el pago de los anuncios según Reales órdenes de 3 Abril 1881 y 9 Enero 1892.

BOLETIN OFICIAL

DE LA PROVINCIA DE SORIA

SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, EXCEPTO LOS DOMINGOS Y FIESTAS PRINCIPALES

GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE SORIA
Y DE LA ZONA LIBERADA DE LA DE GUADALAJARA

CIRCULAR NÚM. 396.

Junta provincial del «Subsidio pro-Combatiente»

Con el fin de unificar los padrones de beneficiarios, reduciendo a un solo padrón los de cada pueblo que las Juntas han ido remitiendo, evitando confusiones y entorpecimientos, esta Junta provincial ha acordado:

1.^o Que por las Juntas locales se envíe un nuevo padrón en el que figuren todos los beneficiarios que actualmente y para el mes próximo han de percibir el subsidio. En la casilla «Observaciones», han de hacer constar la fecha en que fueron alta; es decir, que a continuación de los datos de cada beneficiario y en la casilla indicada, han de decir: Alta de Febrero, Marzo, etc.

2.^o Dicho padrón se enviará a esta Junta provincial antes del día 5 del próximo mes de Septiembre, para lo cual y a fin de evitar retrasos, que en manera alguna han de consentirse en lo sucesivo, las Juntas locales darán la mayor publicidad por los procedimientos acostumbrados, (pregón desde luego) a esta circular, con objeto de que los que hayan de presentar declaración jurada solicitando la inclusión, lo hagan el día 1.^o del citado Septiembre. En dicho día y el siguiente, las Juntas acordarán respecto a las peticiones presentadas, incluyéndolas o denegándolas, y remitiendo el padrón que formen, con toda urgencia, a esta Junta provincial, a la que deben llegar dentro del día 5 de Septiembre. Dicho padrón será, por lo tanto, el único válido, quedando anulados todos los anteriores.

3.^o Quiere recordar esta Junta a todas las locales, la necesidad de poner el mayor celo y aten-

ción en el cumplimiento del servicio, para lo cual, además de tener presentes el decreto número 174 y disposiciones complementarias, especialmente las instrucciones o normas del Gobierno general, publicadas en este *Boletín oficial* el día 5 de Junio último, a las que habrán de ajustarse las Juntas en su funcionamiento, teniendo muy presentes los diferentes extremos que dichas normas comprenden, como son: *plazos* para el trámite de las rectificaciones, envío de nóminas, reintegro de cantidades sobrantes, etc.

Es verdaderamente incomprensible que siendo tan claras y sencillas, haya Juntas que, o no las entienden o no quieren entenderlas, dando pruebas de manifiesta incapacidad; pero como esta Junta provincial no puede admitir tales supuestos, ha de corregir éstas y cualesquiera otras faltas, con toda severidad, imponiendo las sanciones que las disposiciones vigentes autorizan. Es preciso, que las Juntas locales se convenzan de que dichas normas y disposiciones no se publican para leerlas de pasada o ligeramente; es necesario leerlas con la mayor atención y fijeza, haciendo de ellas un verdadero estudio.

En la circular que a continuación de las referidas normas publicó esta Junta provincial, se detallaron los puntos fundamentales, expresándose como había de procederse respecto a *altas, modificaciones en la cuantía, plazo de remisión*, forma de proceder con las *bajas*, reintegro de la *cantidad sobrante*, manera de llenar las casillas de *cantidad satisfecha* y *sobrante a reintegrar*, extremo éste que muchas Juntas no cumplimentan como está indicado, o sea ingresando el *sobrante* en la cuenta de Banco de España denominada «*Reintegros-subsidio Pro-combatiente*», si no que lo hacen en la cuenta general llamada «*Subsidio Pro-combatien-*

te», con lo que producen una perturbación en la contabilidad de esta Junta provincial.

Junta ha habido, como la de *Ambrona*, que ha llenado con la misma cantidad las tres casillas, o sea que en las tres figura la misma cantidad, dándose el absurdo de que el subsidio diario sea igual al mensual.

A continuación se inserta una relación de las Juntas que han incurrido en otras faltas que también se indican, y son:

Juntas que han remitido las nóminas sin la firma del Presidente local

Aldehuela de Agreda y Aylagas.

Nóminas en las que el Presidente local ha firmado en el lugar correspondiente a la firma del Presidente provincial.

Alcubilla del Marqués.

Nóminas en las que se ha omitido el sello de la Alcaldía

Alcubilla del Marqués, Caltojar, Fuentecambrón, Hinojosa de la Sierra, Nalay, Pobar, Ocellilla, Quintana Redonda, Olvega, Osma, Oteruelos, Peñalcázar, Santa Cruz de Yanguas, Santa María de Huerta, Sauquillo de Alcazar, Serón de Nágima, Suellacabras, Valdegeña, Valderrodilla, Vea y Velilla de los Ajos.

Nóminas sin la firma del Secretario de la Junta local

Aldehuela de Agreda, Mazaterón, Miñana y Modamio.

Juntas que han remitido el modelo 3, en lugar del 3 bis

Romanillos de Medina y Santa María de Huerta.

Nóminas en las que las firmas de los beneficiarios aparecen al respaldo de las mismas

Fuentecambrón y Santa María de Huerta.

Juntas que han remitido las nóminas de Julio con fecha de Agosto, debiendo ser ésta la de 30 de Julio.

Villel de Mesa, La Yunta, Villacadima, Valhermoso, Valdelcubo, Torrecuadrada de los Valles, Terraza y Terzaga.

En lo sucesivo se publicará mensualmente relación de aquellas Juntas que no hayan sabido cumplir el servicio, expresando al mismo tiempo la falta cometida y haciendo constar la sanción que se les impone.

Por último, se pone en conocimiento de todas las Juntas, que con esta fecha se han enviado todos los *libramientos* a las Juntas, y que conforme se hizo el mes anterior, el plazo para cobrar las de la provincia de Soria termina el día cinco de Septiembre y las de *Guadalajara* el día ocho; pasadas esas fechas no se podrá cobrar sin auto-

rización especial, siempre que se justifique la causa del retraso; no siendo así, necesitarán acudir al Gobierno general por si tiene a bien autorizar el pago.

Soria 27 de Agosto de 1937.—II Año Triunfal.

El Gobernador-Presidente,
RAMON ENRIQUE CASADO.

GOBIERNO DEL ESTADO

Decreto-ley de Ordenación Triguera

El nuevo Estado, sensible al clamor campesino y fiel a su decidido propósito de «elear a todo trance el nivel de vida del campo, vivero permanente de España» afronta la tarea de iniciar la reforma económica de nuestra agricultura, completada en su día con la reforma social, atajando ya el problema agrícola de mayor rango vital.

Por un lado, el capitalismo liberal venía sacrificando al labrador que vive directamente de su esfuerzo, dejándole inerte y desamparado ante la empresa poderosa o el acaparador desaprensivo, mientras que, por el otro un situación clara de superproducción agrava las trágicas consecuencias de una especulación arraigada y de unos productores desarticulados y sin control sobre el valor de su propio producto.

Todo esto, se ha traducido, en el provecho desordenado de algunos intermediarios del trigo y sus derivados, en el desmerecimiento del precio de nuestro más cuantioso producto del campo y en una nueva ventaja económica para la gran ciudad.

Con fé en las normas que animan al nuevo Estado, consideramos como única solución totalitaria del problema que interesa resolver, la ineludible necesidad de realizar una política de revalorización, asegurando al trigo un precio mínimo remunerador, ordenando la producción y distribución del mismo y sus principales derivados y regulando su adquisición y movilización.

En esta política de revalorización, la ciudad, siempre en privilegio, ha de sentir la hora de la comprensión y de la hermandad. Los campesinos, con petición unánime demandan justicia y junto a ella, el «Pan de la triple consigna», ha de tener necesariamente un valor más alto, un precio mayor, con lo que desaparecerán los jornales exigüos, renacerá la prosperidad en las aldeas y comenzaremos a devolver «al campo, para dotarlo suficientemente, gran parte de lo que hoy absorbe la ciudad en pago de sus servicios intelectuales y comerciales».

Teniendo presente la futura realidad sindicalista del nuevo Estado, se crea un organismo denominado «Servicio Nacional del Trigo» que inicie, recoja y ponga en práctica los fines de ordenación y regulación de la economía triguera que corresponden específicamente a la organización sindical agrícola de esta rama.

El «Servicio Nacional del Trigo», debe de velar constantemente para que esta organización sindical agrícola surja rápidamente a la vida del

Derecho a fin de que asuma las funciones que le son propias e intervenga decisivamente en la economía agraria, que constituye, dentro de la vida nacional, una preocupación destacada del Estado Nacional-Sindicalista.

En mérito de lo expuesto,

DISPONGO:

Artículo primero. Con sujeción a las normas que previene este decreto-ley y disposiciones complementarias, quedan ordenadas la producción y distribución del trigo y sus principales derivados, y se regula su adquisición, movilización y precio.

Artículo segundo. Para la efectividad de los anteriores fines y estudio y propuestas de normas para su cumplimiento, se crea un organismo denominado «Servicio Nacional del Trigo», dependiente de la Comisión de Agricultura y Trabajo Agrícola de la Junta Técnica del Estado o departamento que en su día le sustituya.

Artículo tercero. Promulgadas que sean las normas generales de sindicación agrícola, el «Servicio Nacional del Trigo», procederá a la total organización sindical triguera, la que una vez nacida a la vida del Derecho asumirá tan pronto como se encuentre capacitada, las funciones de carácter sindical triguero que por este decreto-ley se confieren al «Servicio Nacional del Trigo».

Artículo cuarto. La iniciativa del agricultor en cuanto a extensión de la zona a cultivar de trigo, queda subordinada a las órdenes que en atención al interés nacional, dicte el departamento de Agricultura a propuesta o con informe del «Servicio Nacional del Trigo».

El agricultor queda obligado a formular declaración sobre la superficie cultivada de trigo y producción anual, y los tenedores de trigo, sobre sus existencias, todo ello en la forma y plazo que el «Servicio Nacional del Trigo» exija.

Artículo quinto. El «Servicio Nacional del Trigo» adquirirá todas las existencias de trigo producidas legalmente y declaradas como disponibles para la venta por sus tenedores, al precio oficial de tasa y en la forma y condiciones que prevenga el reglamento para la aplicación de este decreto ley.

En concepto de contribución a sus gastos generales, el «Servicio Nacional del Trigo», queda autorizado para deducir del importe del trigo adquirido, el porcentaje que anualmente señale el Gobierno y que en ningún caso podrá exceder de una peseta por quintal métrico para el trigo tipo.

Las compras se efectuarán por la Jefatura Comarcal dentro de cuya jurisdicción se encuentre almacenado el trigo, y se formalizarán antes de cada nueva recolección, cuyo comienzo se fija a este fin en primero de Julio de cada año.

Para realizar las compras, concertará el «Servicio Nacional del Trigo» con aprobación de la Presidencia de la Junta Técnica del Estado y previos informes de las Comisiones de Hacienda y de Agricultura y Trabajo Agrícola, las operaciones de crédito necesarias, disponiendo para tales fines en primer término, del fondo a que se refiere el artículo catorce.

Artículo sexto. Los tenedores de trigo, amparados en la garantía de venta remuneradora que otorga el artículo anterior, conservan el derecho a comerciar libremente con su mercancía sin otras limitaciones que las que a continuación se expresan:

a) Prohibición de vender trigo a fabricantes de harinas.

b) Obligación de vender al precio oficial de tasa.

c) Venta obligatoria al «Servicio Nacional» de la cantidad de trigo que éste exija para atender las necesidades de consumo o regular el mercado nacional. Esta obligación se supeditará a las escalas que periódicamente fije por zonas el «Servicio Nacional del Trigo», y se exigirá en primer término, a los productores.

Artículo séptimo. Los fabricantes de harina y de pan, quedan obligados a efectuar sus ventas por los precios deducidos mediante aplicación de las fórmulas oficiales para el caso establecidas.

Artículo octavo. Se otorga al «Servicio Nacional del Trigo» la exclusiva de venta de este producto a los industriales harineros, quienes vienen obligados a adquirirlo únicamente de dicho «Servicio Nacional», por los precios oficialmente aprobados y según las normas que determine el correspondiente reglamento, y en el que asimismo se prevendrá la forma de intervenir las fábricas de harinas en las que ello pudiere ser necesario.

Los fabricantes de harinas no podrán admitir en fábrica ni en almacenes anejos a la misma, otros trigos que los adquiridos del «Servicio Nacional».

Artículo noveno. Queda prohibida la instalación de molinos maquileros, la ampliación de los existentes, y su explotación cuando hayan permanecido o permanezcan inactivos voluntariamente durante un período superior a un año. Excepcionalmente el «Servicio Nacional del Trigo» podrá autorizar la reapertura de aquéllos en que así lo aconseje el bien público.

Queda prohibida la maquila u operaciones similares a las industrias cuya capacidad de molienda durante veinticuatro horas, sin interrupción sea igual o superior a cinco mil kilos.

Los particulares o entidades que exploten molinos maquileros, no podrán molturar libremente el trigo procedente de maquila.

Artículo décimo. Con la salvedad que al final se expresa, queda prohibida la mezcla de harina de trigo destinada a la panificación con cualquier otra clase de harinas cuyo empleo no sea corriente y tradicional; la incorporación a la misma de sustancias químicas, y en general, la realización de cualquier otra práctica que tenga como consecuencia una merma en el consumo de dicha harina. El departamento de Agricultura, previo informe del Delegado Nacional del «Servicio», concederá las autorizaciones especiales para permitir aquellas mezclas que pudieran resultar necesarias o convenientes.

Artículo undécimo. Todos los años, en el mes de Junio, y con aplicación al período comprendido desde el primero de Julio inmediato al treint-

ta de Junio del año siguiente, se fijarán por decreto los precios-base del trigo y las normas para deducir los de la harina y el pan, así como el porcentaje sobre el importe de las adquisiciones de trigo.

Artículo duodécimo. El incumplimiento de las obligaciones que a los agricultores, tenedores de trigo e industriales señala este decreto-ley será sancionado con multas que se abonarán en metálico y cuya imposición corresponde al Delegado Nacional del «Servicio», y su cuantía será proporcional a la infracción cometida y a los medios económicos del inculpado, sin que pueda exceder de doscientas cincuenta mil pesetas, y sin perjuicio de la responsabilidad penal correspondiente.

El importe de estas multas se ingresará en la cuenta a que hace referencia el artículo catorce de este decreto-ley.

Contra las multas inferiores a diez mil pesetas cabrá recurso de alzada ante la Comisión de Agricultura y Trabajo Agrícola, y contra las demás se podrá interponer análogo recurso ante la Presidencia de la Junta Técnica del Estado.

El plazo de interposición de estos recursos será de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de notificación de la multa, siendo indispensable el previo depósito o afianzamiento del total importe de la sanción impuesta.

Para la exacción de las multas podrá aplicarse el procedimiento de apremio judicial.

Artículo décimo tercero. El Gobierno cuando las necesidades lo aconsejen, determinará las cantidades de trigo que estime oportuno importar o exportar, previa propuesta del Delegado Nacional del «Servicio», e informe de la Comisión de Agricultura y Trabajo Agrícola.

Las cantidades importadas se distribuirán por provincias atendiendo a su déficit triguero, y a la capacidad molturadora de sus fábricas en cuanto no excedan de las necesidades del consumo interior provincial.

El precio de venta de estos trigos se determinará por la Junta Técnica del Estado, en relación con los precios base que se hallen en vigor, y será único para cada clase comercial en todos los almacenes del «Servicio Nacional del Trigo».

La ejecución de dichas exportaciones e importaciones, corresponde exclusivamente al «Servicio Nacional del Trigo».

Artículo décimo cuarto. El saldo resultante en treinta de Junio a consecuencia de la diferencia entre el importe de las compras a los agricultores y el de las ventas a los fabricantes, así como los beneficios procedentes de las importaciones descontados los gastos de conservación del trigo y los generales del «Servicio» no cubiertos con el porcentaje a que hace referencia el artículo quinto, y las compensaciones y gastos a que puedan dar lugar las exportaciones, constituirán un fondo que se destinará a los fines agrícolas que determine el Gobierno a propuesta del Delegado Nacional del «Servicio».

Dicho fondo se ingresará dentro del mes de Julio de cada año, en las Tesorerías de Hacienda, quienes abrirán en la cuenta de Tesorería —Sección de Acreedores al Tesoro— un concep-

to con la denominación «Servicio Nacional del Trigo», con aplicación al cual se ingresará también lo recaudado por multas satisfechas. Con cargo a dicha cuenta se librarán por Hacienda las cantidades que dicho «Servicio Nacional» reclame para atender los fines previstos en el primer párrafo de este artículo y el señalado en el artículo quinto de este decreto-ley.

Artículo décimo quinto. La Dirección del «Servicio Nacional del Trigo» corresponde a un Delegado Nacional que en el desempeño de su cargo tendrá la categoría de Jefe superior de Administración y cuyo nombramiento y separación se hará por decreto.

El Delegado Nacional ostenta la representación del Gobierno en el «Servicio» y asume todas las atribuciones necesarias para la dirección y ejecución del mismo con sujeción a las normas que dicte el departamento de Agricultura a propuesta suya o con su informe.

La Presidencia de la Junta Técnica del Estado designará un Secretario general que desempeñará la subdirección del «Servicio.»

Los Inspectores nacionales que pueda exigir el «Servicio» serán nombrados y separados por el departamento de Agricultura a propuesta del Delegado Nacional, quien podrá suspenderles en sus funciones, dando cuenta inmediata a dicho departamento.

En cada provincia será designado por el Delegado Nacional un Jefe que tendrá su representación y ejercerá las funciones directivas del «Servicio Nacional del Trigo» en el territorio que se le asigne.

El Delegado Nacional limitará las zonas comarcales que la conveniencia del «Servicio» aconseje, y al frente de cada zona comarcal habrá un Jefe nombrado por el provincial respectivo. El Jefe comarcal asumirá las funciones del «Servicio» de su respectiva zona asesorado por una Junta integrada por tres agricultores designados por el Jefe provincial en representación de la pequeña, mediana y gran explotación.

Artículo décimo sexto. El departamento de Agricultura agregará al «Servicio Nacional del Trigo» los asesores técnicos agronómicos que crea pertinente, al objeto de armonizar los intereses agrícolas generales con los específicos del «Servicio.» Estos asesores pertenecerán al cuerpo nacional de Ingenieros Agrónomos.

El departamento de Hacienda tendrá intervención permanente en el «Servicio Nacional del Trigo» en su aspecto contable a través de funcionarios del cuerpo Pericial de Contabilidad del Estado.

Artículo décimo séptimo. El «Servicio Nacional del Trigo»; tendrá personalidad jurídica completa para el cumplimiento de cuantas funciones le confiere este decreto-ley.

También gozará en el cumplimiento de los fines que por este decreto-ley se le asignan de cuantos beneficios concede la vigente legislación a los Sindicatos Agrícolas acogidos a la ley de veintiocho de Enero de mil novecientos seis.

Artículo décimo octavo. Se declara de utilidad pública la ocupación de terrenos y locales que para la instalación de sus almacenes y servi-

cios pueda necesitar el «Servicio Nacional del Trigo», quien a estos efectos podrá realizar las expropiaciones necesarias.

Artículo décimo noveno. Quedan derogadas cuantas disposiciones anteriores a la publicación de este decreto-ley se refieran a las materias por el mismo reguladas, salvo las dictadas sobre trigos actualmente propiedad del Estado.

Artículo vigésimo. Los preceptos de este decreto-ley comenzarán a aplicarse mediante la publicación de las oportunas disposiciones concordantes, entrando plenamente en vigor el primero de Noviembre del año en curso.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo primero. Con aplicación al período que media desde la publicación de este decreto-ley hasta el treinta de Junio de mil novecientos treinta y ocho, la fijación de precios, fórmulas y porcentaje a que se refiere el artículo undécimo, se determinan por decreto de esta fecha.

Artículo segundo. Para la implantación del «Servicio Nacional del Trigo», el Gobierno anticipará los créditos necesarios para los gastos generales del mismo en la medida de sus necesidades y conforme a presupuesto que aprobará la Presidencia de la Junta Técnica del Estado, previos informes de las Comisiones de Hacienda y de Agricultura y Trabajo Agrícola.

Dado en Burgos a veintitrés de Agosto de mil novecientos treinta y siete.—II Año Triunfal.—FRANCISCO FRANCO.

(B. O. del E. del día 25.)

Decreto núm. 341

El decreto-ley de esta misma fecha sobre «Ordenación Triguera», señala, mediante la creación y designación de funciones del «Servicio Nacional del Trigo», las directrices generales para encauzar y resolver por nuevos y eficaces derroteros tan extenso y trascendental problema.

Para cumplimentar lo dispuesto en el artículo once del decreto-ley mencionado, con la excepcional demora obligada de fecha, y regular la producción desde la inmediata sementera, se publica este decreto que contiene, además, algunas disposiciones normativas de la forma en que tiene que desarrollarse la «Ordenación Triguera» en la primera etapa que sigue a su implantación, e inserta finalmente, a título transitorio, las que se juzgan necesarias para regular el mercado triguero en el tiempo que media hasta la plena vigencia del nuevo sistema ordenador de la economía triguera.

En consecuencia de lo expuesto.

DISPONGO:

Artículo primero. En el próximo año agrícola, no podrán destinarse normalmente al cultivo del trigo mayores extensiones de terreno que las dedicadas a dicha producción en el año agrícola actual, salvo que por el Delegado Nacional del Trigo se autoricen o acepten excepciones justificadas por motivos de índole agronómica o social. Para garantizar el cumplimiento de esta obli-

gación, dejarán de reputarse como producciones legales, las cantidades calificadas de excesivas. Se conceptuarán como tales, las que en su día declare cada productor en cada pueblo, que excedan de las que correspondería obtener atendiendo únicamente a los distintos rendimientos medios municipales que se obtengan en la cosecha venidera y se hayan obtenido en la actual.

Artículo segundo. Para la campaña de compra de trigo que termina en treinta de Junio del año próximo, se considera como de calidad tipo para establecer el precio-base o inicial de tasa, el trigo candeal «Arévalo» y semiblandos similares, con un peso por hectolitro de setenta y siete kilos y un máximo de impurezas del tres por ciento. Dicho precio-base se entiende para mercancía sobre almacén Valladolid.

Los Jefes provinciales del «Servicio Nacional del Trigo», teniendo en cuenta las diferencias que según tipos, emplazamientos, pesos por hectolitro e impurezas correspondan a las diversas calidades de trigo, y en relación con el precio inicial asignado al señalado como tipo-base en el párrafo anterior, harán una clasificación de las variedades comerciales producidas en la provincia, y propondrán escalas graduadas de bonificaciones o descuentos para deducir sus precios iniciales de tasa.

Dichas propuestas se someterán al informe de los Ingenieros Jefes de las Secciones Agronómicas, quienes, en caso de desacuerdo, propondrán las modificaciones que estimen convenientes, en el plazo máximo de cinco días.

El Jefe provincial del «Servicio Nacional del Trigo» remitirá con el informe antedicho, las muestras tipos y las escalas aludidas referentes a los trigos comerciales clasificados, al Delegado Nacional, quien propondrá al departamento de Agricultura, para su aprobación definitiva, los precios iniciales de tasa asignables a cada clase comercial y sus escalas respectivas. Mientras no recaiga la superior aprobación se entenderán vigentes los propuestos por los Jefes provinciales, con las modificaciones introducidas por las Secciones Agronómicas.

Artículo tercero. Los Jefes comarcales podrán rechazar las partidas de trigo que tengan más del tres por ciento de impurezas y aquellos que por sus características sean impropios para la panificación.

Cuando surjan diferencias sobre la clasificación del trigo entre los vendedores y los Jefes de almacén, resolverá la discrepancia el Ingeniero Jefe de la Sección Agronómica respectiva o persona por él delegada, si previamente no les ha puesto de acuerdo el Jefe comarcal.

Artículo 4.º Los precios del trigo tipo, base de tasa, para la adquisición a tenedores, hasta treinta de Junio de mil novecientos treinta y ocho son los siguientes:

	Pesetas.
Meses de Agosto y Septiembre	48
Mes de Octubre.....	48 60
» » Noviembre.....	49 20
» » Diciembre.....	49 80
» » Enero.....	50 40
» » Febrero.....	51

	Pesetas
Mes de Marzo	51 60
» » Abril.....	52 20
» » Mayo.....	52 80
» » Junio.....	53 40

Las demás clases comerciales de trigo a partir de la tasa inicial que a las mismas correspondan, sufrirán idénticamente en sus precios de compra a los tenedores un aumento mensual de 0'60 pesetas.

Todos los trigos se venderán siempre por el «Servicio Nacional» a los fabricantes de harinas a los precios que resulten de incrementar en seis pesetas sus iniciales de tasa,

Los mencionados precios se entienden por quintal métrico para mercancía sana, seca, limpia y sin envase, puesta sobre vehículo al pie de almacén del «Servicio Nacional».

Artículo quinto. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo quinto del decreto-ley de esta misma fecha sobre «Ordenación Triguera», queda autorizado el «Servicio Nacional del Trigo» para deducir el uno por ciento del importe de la mercancía adquirida.

Esta prima será descontada en su totalidad del primer pago que se haga efectivo.

Artículo sexto. Para la compra de trigos por el «Servicio Nacional» se respetará un turno de preferencia, adquiriendo en primer término y simultáneamente los trigos viejos y los de pequeños productores cosechados en el presente año. La proporción o cupo de compras preferentes serán determinados en cada comarca por el Delegado Nacional.

En ningún caso el «Servicio Nacional de Trigo» adquirirá mercancía de los fabricantes de harina.

Artículo séptimo. El pago de las adquisiciones de trigo por el «Servicio Nacional» se hará efectivo: el setenta por ciento dentro de los siete días hábiles siguientes a la formalización de la venta, y el treinta por ciento restante a los noventa días, sin devengo de intereses.

El Delegado Nacional podrá acordar el pago total e inmediato de las partidas que aporten los pequeños productores, definiendo cuales tienen que conceptuarse de tal modo en función de los datos que la estadística de producción arroje.

Artículo octavo. Los fabricantes de harinas quedan obligados a molturar los trigos viejos adquiridos por el «Servicio Nacional» en la proporción que determine el Delegado Nacional y que no excederá del cuarenta por ciento de su molturación efectiva.

Artículo noveno. Las fábricas de harinas quedan obligadas a mantener una existencia propia de trigos y harinas computadas en trigo, equivalente a la capacidad real de molturación de la fábrica en trabajo constante y sin interrupción durante treinta días. La importancia de esta existencia podrá reducirse por el departamento de Agricultura en la forma y cuantía que proponga el Delegado Nacional del «Servicio».

A los efectos anteriores, cuando la fábrica molture principalmente centeno, la existencia reglamentaria de trigo será fijada y reducida en forma análoga.

Para el cómputo de la provisión reglamentada anteriormente no se tendrá en cuenta la existencia de trigos y harinas en depósito, de cualquier clase que éstos sean. A este efecto, los industriales contabilizarán ordenadamente y por separado el movimiento y existencias de las diversas mercancías.

Con independencia de la constitución de la provisión permanente reglamentada en el primer párrafo de este artículo, las fábricas de harina vienen obligadas a adquirir mensualmente una cantidad mínima de trigo igual en peso a la de harina vendida o salida de fábrica en el mes anterior.

Artículo décimo. Para que los organismos rectores tengan noticia mensual de la marcha del mercado de trigos, todos los compradores de este cereal, sean o no fabricantes de harina, continuarán llevando el libro oficial de operaciones.

Dichos industriales presentarán dentro de los cinco primeros días de cada mes, a las Jefaturas de las Secciones Agronómicas y a las provinciales del «Servicio Nacional del Trigo», una relación totalizada del movimiento de mercancías habido en el mes anterior en el almacén o en la fábrica, y comprensiva de los diferentes conceptos registrados en el libro oficial.

Artículo undécimo. El precio del quintal métrico de harina y el del kilogramo de pan familiar se determinará por el departamento de Agricultura, en la forma que detalla el reglamento, mediante la aplicación de las siguientes fórmulas:

$$PH = \frac{(Pt + Gt + Mm + Vs) 100}{Rt}$$

$$Pp = \frac{PH + G}{Rp} + Bi$$

En las que,

PH = precio del quintal métrico de harina en fábrica y sin envase.

Pt = precio de venta al harinero del quintal métrico del trigo típico molturado en la provincia.

Gt = gastos de transporte hasta fábrica del quintal métrico de trigo de las partidas adquiridas en el mes anterior, y que equivaldrán al efectivo que corresponda al servicio ferroviario siempre que éste pueda utilizarse, y que no pasarán nunca de 0'05 pesetas por quintal métrico y kilómetro de distancia en la parte de recorrido en que forzosamente tenga que utilizarse otro medio de transporte.

Mm = margen de molturación del quintal métrico de trigo, que, incluyendo beneficio industrial, oscilará entre 3 y 4'30 ptas.

Vs = valor de los subproductos que se obtienen de la molturación de un quintal métrico de trigo, estimados según las cotizaciones medias del mes precedente.

Rt = rendimiento en harina del trigo típico antes aludido.

Pp = precio del kilogramo del pan de miga blanda o de flama en tahona o despacho de venta.

G = gastos producidos por el transporte y elaboración del quintal métrico de harina, calculándose el primero con el mismo criterio que para el trigo se ha establecido en la fórmula primera.

Rp = rendimiento del quintal métrico de harina en kilogramos de pan.

Bi = beneficio industrial del panadero que no excederá de 0'03 pesetas por kilogramo de pan familiar.

En el reglamento correspondiente se detallará la manera de fijar los precios de los demás tipos de pan, así como los recargos admisibles por entrega a domicilio o en pueblo alejado del lugar de fabricación.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Mientras no se pongan en vigor las normas establecidas en el decreto-ley de esta misma fecha sobre «Ordenación Triguera», se regulará el mercado de este cereal mediante la aplicación de los disposiciones siguientes:

Artículo primero. Se fija la tasa inicial de cuarenta y ocho pesetas aplicable durante los meses de Agosto y Septiembre al trigo considerado como tipo de comparación en el artículo segundo de este decreto, para mercancía sobre almacén Valladolid. A este precio-base se ajustarán las diferentes tasas a señalar por las Secciones Agronómicas para las demás clases de trigo en cada provincia y mercado, teniendo en cuenta los escalonamientos o diferencias que tradicionalmente se registran en las diferentes plazas por su situación y para los distintos tipos y calidades de trigo.

Estas tasas se entenderán para mercancía sana, seca, limpia y sin saco, interpretando estas condiciones para las que tradicionalmente se aceptan en mercado.

El precio señalado para cada clase de trigo y plaza, se incrementará en 0'60 pesetas para el mes de Octubre.

Artículo segundo. Cuando un trigo ofrecido a la venta no reúna las condiciones de sanidad o limpieza aceptadas tradicionalmente por el mercado y ofrezca dudas, por tanto, si puede cotizarse normalmente dentro del tipo de tasa señalado para su clase, el comprador o vendedor, indistintamente, lo pondrá en conocimiento de la Jefatura de la Sección Agronómica respectiva o de uno de sus delegados, quien resolverá sin apelación si es o no comercial el trigo.

La depreciación máxima que por deficiente estado sanitario o de limpieza podrá acordar la Sección Agronómica no será en ningún caso superior al cinco por ciento del precio de tasa.

Artículo tercero. En todos los locales de compra de trigo se indicará al público, en cartel anunciador colocado en sitio bien visible, los precios de tasa del trigo y sus equivalentes en reales por fanega o medida corriente en el lugar.

Artículo cuarto. El cupo mínimo de compra mensual a que se refiere el último párrafo del artículo noveno de este decreto, lo cubrirán los fabricantes de harina por toma de trigos pignorados previa justificación de esta circunstancia por los propios vendedores, en proporción al menos del

veinticinco por ciento de aquel cupo, reservando además otro veinticinco por ciento para adquisición de trigos viejos siempre que se ofrezcan al mercado.

Artículo quinto. Las infracciones por quebrantamiento de tasa, cualquiera que sea el procedimiento empleado para falsear ésta, serán sancionadas por la Comisión de Agricultura y Trabajo Agrícola, previo informe o denuncia de las Jefaturas de las Secciones Agronómicas, castigándose con multas de mil a cien mil pesetas las primeras infracciones, según cual sea la gravedad de la falta, la capacidad económica del infractor y el grado de malicia revelado en la transgresión, y con multa doble en los casos de reincidencia en igual falta.

Con independencia de estas sanciones, las infracciones de tasa se considerarán como delito de auxilio a la rebelión, que se sustanciará con arreglo al Código de Justicia militar.

Las demás infracciones a los preceptos establecidos en estas disposiciones serán sancionados, previo informe de las Secciones Agronómicas, por los Gobernadores civiles en la forma y cuantía reguladas por el artículo cuarto del decreto-ley de dieciséis de Febrero de mil novecientos treinta y siete.

El recurso de alzada autorizado en dicho artículo cuarto, así como la propuesta de elevación de sanción a que se refiere el artículo quinto, serán resueltos por la Comisión de Agricultura y Trabajo Agrícola como autoridad superior competente para entender en todo cuanto se relacione con la interpretación y cumplimiento de lo establecido en estas disposiciones. Se faculta a la citada Comisión, en este segundo caso, o sea, cuando entienda y resuelva en primera instancia, para imponer multas de hasta cincuenta mil pesetas, como sanción a primeras infracciones, que podrá duplicar en los casos de reincidencia.

Para la exacción de estas sanciones será aplicable el procedimiento de apremio judicial.

Artículo sexto. El importe de lo recaudado por imposición de sanciones de tipo económico, que se redimirán a metálico, se ingresará en las Tesorerías de Hacienda aplicándolo a la cuenta cuya apertura se ordena en el artículo catorce del decreto-ley de esta fecha sobre «Ordenación Triguera».

Artículo séptimo. Las Jefaturas de las Secciones Agronómicas, cuidarán por el más fiel cumplimiento de lo ordenado en estas disposiciones, utilizando para este fin los Inspectores oficiales que al efecto se designen y los que con carácter auxiliar puedan nombrar a propuesta de las entidades oficiales y Sindicatos de productores de trigo que patrióticamente vienen obligados a prestar este servicio.

Los mencionados Inspectores, mientras tengan vigencia estas disposiciones transitorias, dependerán directamente de las Jefaturas de las Secciones Agronómicas, ajustándose en el desempeño de su función, a cuantas instrucciones reciban de ella. Sus manifestaciones en acta harán fé en cuanto se refieran a los hechos por ellos presenciados.

En cualquier caso, los nombramientos ten-

drán caracter de eventualidad para todos los efectos, y la suspensión de funciones se acordará directamente por quienes hayan hecho los nombramientos.

Artículo octavo. Los Inspectores aludidos en el artículo anterior, y el personal facultativo y técnico de las Secciones Agronómicas, tendrán franca entrada en los almacenes de compra de trigo y fábricas de harina, quedando obligados los industriales propietarios a darles todo género de facilidades para el cumplimiento de su función inspectora.

Artículo noveno. Por la Junta Técnica del Estado, se dictarán las órdenes complementarias que juzgue conveniente para la más fiel observancia de las anteriores disposiciones transitorias.

ARTÍCULO ADICIONAL

Los fabricantes de harina quedan obligados a presentar declaración jurada por duplicado, en la que se consignarán las existencias de trigo propias y extrañas, que no sean del Estado, que tengan al terminar el treinta y uno de Octubre del año en curso, puesto que a partir del primero de Noviembre se considerarán caducados administrativamente los depósitos de trigo que tengan dichos fabricantes.

Asimismo los fabricantes y almacenistas de harina y panaderos, quedan obligados a prestar declaraciones análogas con referencia a esta mercancía.

Dichas declaraciones habrán de quedar entregadas en las Jefaturas provinciales del «Servicio Nacional del Trigo» o en oficinas de Correos, como envío certificado a las indicadas Jefaturas, precisamente el día uno o dos de Noviembre próximo.

Desde primero de Noviembre inclusive, dichos declarantes registrarán detalladamente cuantas transacciones realicen con las expresadas mercancías hasta la fecha en que el «Servicio Nacional del Trigo» afore sus existencias.

Las declaraciones indicadas servirán de base para la liquidación del abono que los declarantes han de hacer al «Servicio Nacional» por la diferencia de cinco pesetas con cuarenta céntimos por quintal métrico de trigo que resulte de aplicar el artículo cuarto de este decreto.

A estos efectos las existencias de harina se computarán por su equivalente en trigo.

En las liquidaciones se concederá a los declarantes una bonificación del 5 por 100 de su total importe.

DISPOSICION FINAL

Los artículos primero, noveno, décimo y los transitorios de este decreto entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el *Boletín oficial* del Estado.

Los demás preceptos del mismo tendrán vigencia desde primero de Noviembre del año actual.

Dado en Burgos a veintitrés de Agosto de mil novecientos treinta y siete.—II Año Triunfal.—FRANCISCO FRANCO.

(B. O. del E. del día 25.)

INSPECCION PROVINCIAL DE SANIDAD DE SORIA

Circular

El Excmo. Sr. Gobernador general del Estado, comunica a esta Inspección lo siguiente:

«Teniendo conocimiento este Gobierno general de que por parte de algunos industriales, dedicados a la venta de productos químicos y farmacéuticos, se están expendiendo al público, a precios caprichosos, sin tener para nada en cuenta el contenido del decreto de S. E. el Jefe del Estado de 13 de Octubre de 1936 (decreto número 26), que dice:

«Queda prohibida la venta de productos a precios superiores a los que regían el 18 de Agosto del año corriente, siempre que la alteración no esté previamente autorizada. Esta autorización se solicitará justificando los motivos de mayor coste. Se impondrán severísimas sanciones a todo español o extranjero que intente beneficiarse de las exigencias de la guerra o de las necesidades nacionales.»

«Por lo expuesto se servirá V. S. proceder con máximo rigor contra toda infracción cometida, llegando hasta la incautación de aquellos productos cuyo precio de venta superior al que deba regir no esté justificado plenamente, poniendo a mi disposición los mismos para resolver como proceda.»

Lo que se publica para conocimiento de los interesados y para cuantos hayan satisfecho facturas en las que hayan notado un injustificado aumento, los que dirigirán la denuncia juntamente con el justificante a la Inspección provincial de Sanidad.

Soria 25 de Agosto de 1937.—II Año Triunfal.—El Inspector provincial de Sanidad, José Viñes Ibarrola.

2119

Ayuntamientos

ALCUBILLA DE AVELLANEDA 2043

Ignorándose el paradero de los mozos Frutos de la Torre Pascual y Francisco Javier Lafuente del Amo, nacidos en 1918 y pertenecientes por tanto al reemplazo de 1939, de conformidad con lo dispuesto por el Comandante Jefe de la Caja de Recluta núm. 33, Soria, se cita por medio del presente a los expresados mozos para que se presenten en la ya mencionada Caja de Recluta número 33, Soria, en los días que se cita en el *Boletín oficial* de la provincia de fecha 13 de los corrientes; pues de no hacerlo así les parará el perjuicio a que haya lugar.

Alcubilla de Avellaneda 16 de Agosto de 1937.—II Año Triunfal.—El Alcalde, Malaquías Pascual.

SORIA.—Imprenta provincial.